

LA VIDA ECONÓMICA DE PERSONAS DESMOVILIZADAS EN CIUDAD BOLÍVAR, BOGOTÁ.

HÉCTOR LEYVA ANGULO¹

RESUMEN

Esta investigación presenta algunas experiencias perceptuales de la población desmovilizada en torno al restablecimiento económico con el apoyo de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) como referente para el fortalecimiento de la política pública y de los procesos metodológicos y operativos de reintegración económica de ésta población en Colombia. Este documento presenta las percepciones y emociones de la población desmovilizada que actualmente vive en Ciudad Bolívar, Bogotá, en torno al proceso de reintegración económico vivido, a partir de entrevistas semi-estructuradas realizadas a una muestra pequeña de la población que vive en Ciudad Bolívar. Se registra el sentimiento de satisfacción o insatisfacción del proceso y algunas recomendaciones que los actores que reciben directamente la ayuda consideran pertinente realizar para afianzar la efectividad y eficacia del proceso. Los referentes perceptuales se presentan en el marco de la experiencia que al respecto existe en el mundo y en Colombia y que se resume en el presente documento a partir de algunos registros académicos recientes.

Palabras clave: Reinserción, Colombia, Desmovilizado, paramilitar, autodefensa, guerrilla, emprendimiento.

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente el proceso de reintegración de población desmovilizada en Colombia es una de los más exitosos técnica y legalmente y entre los más robustas financieramente que existen en el mundo; y, a diferencia de otras experiencias, la que mayor financiación del gobierno nacional tiene en proporción con el aporte de la cooperación internacional.

Las experiencias apoyadas por la cooperación internacional y organismos multilaterales en los términos como actualmente se conocen los procesos de DDR, tiene alrededor dos décadas en el mundo. Por su parte Colombia tiene una experiencia algo similar a partir de la desmovilización del M-19 y otros grupos, y fortalecida a partir de las desmovilizaciones individuales y colectivas iniciadas en el

¹ Ingeniero Forestal de la Universidad del Tolima, Magister en Planificación y Administración del Desarrollo Regional de la Universidad de los Andes y actualmente estudiante con dedicación exclusiva de tercer semestre de la Maestría en Ciencia Política en la Universidad de los Andes.

año 2002. Experiencia que se ha nutrido de las que se han desarrollado en diferentes países del mundo y que a su vez hoy es referente para procesos que pretenden ser iniciados o continuados en otros.

La experiencia de Colombia presenta un importante balance positivo en Desarme y Desmovilización. Y aunque el componente de Reintegración es igualmente exitoso, este no lo es tanto y por ello se avanza desde la ACR y las entidades que le apoyan técnica y financieramente en fortalecer el compromiso del sector empresarial y la sociedad en general, en torno a su aporte al proceso. Estos dos aspectos se identifican como los que requieren mayor fortalecimiento. Pero igualmente el componente del aprestamiento de las personas desmovilizadas para vincularlos al ambiente laboral o apoyarlos como empresarios de éxito es otro de los aspectos en los que se continúa innovando con el fin de abrir una puerta que con el tiempo se ha identificado no permite la salida hacia la autodependencia o autosuficiencia económica de dichas personas, como gran propósito para asegurar la permanencia de los excombatientes en la vida civil desde la legalidad.

Po lo tanto la presente investigación se centrará en la percepción que los participantes, que viven en Ciudad Bolívar en Bogotá, tienen de su proceso de reintegración, específicamente en el componente de generación de ingresos; y sus sugerencias en torno al deber ser para fortalecer las opciones de éxito. La investigación responde a preguntas como ¿Cuáles son las dificultades del proceso de restablecimiento económico de los participantes? ¿Es el restablecimiento económico fundamental para evitar la reincidencia de los desmovilizados? ¿Cómo enfrentan los participantes de Ciudad Bolívar sus necesidades económicas? ¿Cuáles son las expectativas económicas de los participantes?

Finalmente ésta investigación deja un soporte valioso, para quienes que se decidan a emprender investigaciones en torno al tema económico en particular; o de la mirada que tienen del proceso quienes lo viven o vivieron directamente, en general: los desmovilizados de grupos armados ilegales.

Esta investigación está dividida en tres partes. La primera, un marco teórico que incluye los conceptos básicos de DDR, con énfasis en el restablecimiento económico; algunas experiencias de

DDR a nivel mundial incluida la desarrollada en Colombia; el contexto de la lucha paramilitar y guerrillera en Colombia desde 1990, y la experiencia del restablecimiento económico de las personas desmovilizadas de éstos dos grupos. La segunda, los datos empíricos a través de los cuales, de manera perceptiva y emocional, los participantes evalúan el impacto de los resultados obtenidos en torno a la generación de ingresos, la interrelación con las entidades que apoyaron su restablecimiento económico, y unos planteamientos generales a cerca de la política pública relacionada con éste componente. Y, tercero, algunas conclusiones generales en relación con componente de generación.

2. MARCO TEORICO

En la década del 30 del siglo pasado dos importantes científicos, uno de las ciencias físicas otro de las ciencias humanas, se preguntaban qué se puede hacer para defender a la humanidad de los estragos de la guerra? El primero, Albert Einstein, preguntaba: ¿Es tal la capacidad de odiar y destruir de la humanidad que permite que una minoría dominante y egoísta manipule masas irracionales al punto de desatar en ellas la psicosis colectiva; psicosis, que por cierto, se encuentra latente en períodos de normalidad y se manifiesta en momentos excepcionales? El segundo, Sigmund Freud, respondía: los conflictos de intereses entre los hombres se zanján en principio mediante la violencia. Violencia del poder del músculo, y posteriormente de las armas y del intelecto a través de los cuales ha tenido siempre el propósito de matar. Pero cuando el fuerte se percató que su trabajo puede ser realizado por la unión de muchos, deja de matar para someter. Pero la unión de esos muchos lleva a acuerdos para evitar el sometimiento de la mayoría por el más poderoso. Logrado el propósito de doblegar al hiperpoderoso se disuelve la unión hasta que finalmente aparece otro que se considera el más fuerte, y así el juego se repetirá sin término².

² Ver este cruce epistolar entre estos dos científicos en los links:

<http://www.upf.edu/materials/fhuma/etfipo/eticac/docs/e4.pdf> y

<http://www.ipan.org.br/arquivos/artigos/Carta%20del%20Dr%20Freud%20al%20profesor%20Einstein%20sobre%20la%20violencia%20y%20la%20guerra.pdf>

Buena parte del debate académico actual gira en torno a las características de las guerras civiles después de la guerra fría. Por un lado domina el sentimiento altruista y por otro la codicia que dan peso diferencial a las dimensiones sociales, económicas y políticas. En el primero, se reivindican los intereses de los más desaventajados; para los teóricos de la segunda, la capacidad de acceso a recursos económicos que tienen los rebeldes determina sus capacidades de organización y subsistencia (Camacho, 2002).

Después de la caída del Muro de Berlín, en su mayoría las guerras contemporáneas han sido guerras civiles. Por un lado, Mary Kaldor describe los conflictos civiles contemporáneos como “nuevas guerras”, que buscan el beneficio económico, con características criminales y que afectan principalmente a la población civil. Por otro lado, los teóricos de la elección racional concluyen que la guerra es la continuación de la economía por otros medios (Gutiérrez y Barón, 2008).

Al respecto Arnsón (2005) manifiesta que contrario a lo que se esperaba, con el fin de la guerra fría y de la confrontación de las superpotencias, el mundo en desarrollo no fue testigo de menos conflictos armados, sino de nuevas y formas más mortales de guerra civil. Algunos conflictos generados desde la lógica de la guerra fría (Cambodia, El Salvador, Guatemala y Mozambique) finalizaron a través de acuerdos de negociación política. Pero en lugares como Afganistán, Angola, Colombia, Somalia y Zaire sus conflictos de larga duración enfrentaron una variedad de movimientos rebeldes intensificados por estados débiles o colapsados. En otros lugares, tales como Ruanda y los Balcanes, emergieron conflictos étnicos de proporciones catastróficas. Una distinción entre las “viejas guerras” de la guerra fría y las nuevas guerras de los 1990s, como argumenta Mary Kaldor, puede ser entendida solamente en el contexto de la globalización política, económica, militar y cultural; estas últimas guerras tienen una distinción difusa entre guerra y crimen organizado, son a la vez conexiones locales y conexiones transnacionales, y fomentan una guerra económica que está construida sobre el saqueo, transacciones económicas y la influencia externa del mercado negro sostenida a través de la violencia. Los recursos naturales no solamente sirvieron para financiar el avance y los altos niveles de violencia (en Angola,

Sierra Leona y Liberia con diamantes y petróleo) por los rebeldes y las fuerzas del Estado sino también para redefinir la lucha. Los recursos emergieron como un medio y un fin para la lucha. No solamente como un objetivo estratégico y militar sino más bien como un objetivo empresarial altamente racional que enriqueció a élites particulares o facciones.

Keen David (2008), anota que no todas las guerras civiles post guerra fría son impulsadas por causas económicas. Sin embargo él argumenta que algunas guerras empiezan por motivaciones sociopolíticas y luego mutan a beneficios económicos fundamentalmente.

Al respecto plantea Collier (2000), que de los 27 conflictos armados más importantes ocurridos en 1999 todos menos dos ocurrieron dentro de las fronteras nacionales. Como un obstáculo al desarrollo, la rebelión interna perjudica especialmente a los países más pobres del mundo. Qué motivó estas guerras civiles? La codicia o los agravios? Desde una perspectiva económica, Collier (2000), con base en las guerras sucedidas entre 1965 y 1999, argumenta que el riesgo de una guerra civil está relacionado con la dependencia de bienes primarios de exportación y los bajos ingresos de la población y que los aspectos de inequidad, étnicos y la falta de democracia poco inciden. Sin embargo, posteriormente Collier & Hoeffler (2001) manifiestan que dicho riesgo depende de cuatro factores de manera significativa: 1. Ingreso per cápita, 2. Exportación de recursos naturales, 3. Tamaño de la población y 4. Fraccionamiento etnolingüístico. Ellos describen las rebeliones como motivadas por la mezcla de un deseo altruista de rectificar los agravios de un grupo, y de un deseo egoísta de saquear los recursos de otros.

Fearon & Laitin al tomar la misma base de datos y en períodos de cinco años, como lo hicieron Collier & Hoeffler, reportan que la significancia estadística entre exportación de recursos naturales y guerra civil es bastante baja. Elbadawi & Sambanis dicen que la significancia depende de cómo cubrir los datos faltantes y concebir la operacionalización de guerra civil; manifiestan estar cautelosamente de acuerdo con Fearon y Laitin. Hegre apoya los resultados de Collier & Hoeffler; sugiere que si se utiliza

un umbral de 25 muerte por año, la significancia entre productos primarios de exportación y guerras civiles es baja, pero al utilizar el umbral de los 1.000 muertes y la misma base de datos de éstos dos autores los resultados son los mismos, aunque él utiliza variables de control y procesos estadísticos diferentes; también sugiere que la relación productos primarios y guerra civil es menos importante, algunas veces, que lo que sugieren Collier & Hoeffler (Ross, 2004).

Ross (2004), respecto a la relación entre recursos naturales y guerra civil, sugiere que de manera general: primero, el petróleo incrementa la probabilidad de los conflictos principalmente separatistas; segundo, materias primas saqueables como piedras y minerales preciosos y drogas no influyen notablemente en la iniciación de un conflicto pero sí en su prolongación; tercero, no existe aparentemente vínculo entre materias primas agrícolas y guerra civil; y, cuarto, la asociación entre productos primarios y el inicio de una guerra civil no es robusta. También el autor sugiere algunas inconsistencias presentadas en la relación Recurso Natural - Guerra Civil causadas por la diferencia en la forma como diferentes investigadores codifican las guerras civiles y cómo ellos enfrentan la dificultad relacionada de los datos faltantes. Igualmente resalta que aún existen algunos aspectos de la relación recurso-guerra civil poco entendidos.

Humphreys (2005) encontró que la dependencia de la exportación de petróleo y de diamantes está asociada con guerras más cortas, porque la victoria militar es más fácil a pesar de la obstrucción a los acuerdos negociados. Los ingresos del petróleo son muchas veces más accesibles por el gobierno que por los rebeldes, aun así las fuerzas rebeldes pueden robar petróleo o extorsionar a cambio de protección o realizar secuestros económicos a las compañías petroleras.

La dimensión más conocida en la actual literatura es la “saqueabilidad³” de los recursos naturales que mide la facilidad con la cual los rebeldes obtienen ingresos de estos recursos. Este aspecto se ha

³ Según Ross (2004) los recursos naturales tienen tres características principales. 1. Saqueable. Facilidad con la que puede ser extraído y transportado un recurso por un individuo o grupo pequeño de trabajadores poco capacitados (drogas, piedras y minerales preciosos, productos agrícolas, madera); son poco saqueables aquellos que requieren un desarrollo tecnológico importante y mano de obra calificada (gas, petróleo). 2. Obstruible. Si su

matizado a través de concepciones como la accesibilidad, o de variaciones como obstroctubilidad. Esta saqueabilidad tiene varias características (Le Billon, 2009):

Finalmente, Mats Berdal & David Keen (1997), argumentan que derrocar al enemigo o llevarlo a la mesa de negociaciones es menos importante para algunos actores involucrados quienes aseguran mayores beneficios con la continuación del conflicto que finalizarlo a partir de la saqueabilidad de los recursos o de la generación de rentas a partir de su obstrucción como mecanismo para la extorción.

El Conflicto colombiano

Durante los últimos dos siglos Colombia ha sufrido un conflicto armado interno desde la guerra de los mil días «una de las guerras más violentas del continente» (1899-1902), pasando por la Violencia⁴ entre liberales y conservadores de los años 47 al 57, que continúa con la Violencia de los 60's con el surgimiento de las guerrillas comunistas ELN y FARC, que sigue con el proceso de reinserción de varios grupos guerrilleros en los 90's; para finalizar en el proceso contrainsurgente (que se inicia en los 80's) de los paramilitares que posteriormente desemboca en una confusa alianza entre paramilitares, guerrilla y narcotráfico en un momento en el que la lucha contra el terrorismo se incrementa a partir del 11 de septiembre de 2001 (Sánchez, 2009).

“El alzamiento armado solo es justo cuando la población esté sujeta a lo que el padre Mariano hace siglos llamó “la tiranía insoportable”, cuando las autoridades se sostienen a base de la represión o de la fuerza bruta. Pero este no es ni ha sido el caso de Colombia. Ciertamente aquí tenemos una de las

transporte es fácilmente obstruido por un grupo pequeño escasamente armado; es no obstruible cuando solo puede ser bloqueado con armamento pesado. 3. Legalidad. Si puede ser comercializado en los mercados internacionales legales.

⁴ La Violencia es en Colombia un período histórico determinado; es una forma particular de guerra caracterizada por la pluralidad de procesos y no por simples relaciones binarias; pero la violencia también es “un componente dentro de la guerra”, un modo de hacerla. La violencia es pues una guerra sin nombre, y las guerras sin nombre suelen ser más sucias. En el siglo XIX a las guerras civiles se las nombraba como revoluciones. A mediados del siglo XX en algunas zonas del sur del Tolima o los Llanos Orientales, en la frontera con Venezuela, los campesinos no utilizaban el término Violencia, de origen más bien urbano, sino el de revolución. Así mismo desde principios de los sesenta, para combatir la Violencia los parlamentarios colombianos se referían a ella como una “gran ola de criminalidad”, pese a su gravedad, extensión y duración. Otros, pensando más bien en el futuro, acogieron, por razones prácticas, el calificativo de guerra civil (Sánchez, 2009)

distribuciones del ingreso más desiguales del mundo, que abundan la injusticia, el pisoteo de derechos, la exclusión de los débiles. Pero no tenemos ni hemos tenido un Estado totalitario, una dictadura asfixiante, contra lo cual no quede más remedio que alzarse en armas. De hecho, cojitranca y todo, tenemos una de las democracias electorales más sólidas del hemisferio” (Gómez, 2013).

La violencia guerrillera. El surgimiento de las guerrillas parece responder al desgaste del Frente Nacional (1958-1976) que fue incapaz de hacer frente a las diferentes demandas sociales de entonces. Las FARC surgieron en 1964 a raíz de la ocupación violenta de Marquetalia (Tolima) por parte del Ejército. El ELN nació como una guerrilla revolucionaria en 1964, bajo la inspiración de la revolución cubana. El EPL en 1967 cuando el pleno del partido comunista marxista leninista ordenó el traslado de los cuadros directivos al campo. Y el M-19 en 1979 a raíz de la dudosa derrota electoral del General Rojas Pinilla. A partir de 1982 se han venido haciendo esfuerzos para desactivar la insurgencia, por la vía política. Es el caso de la apertura política, la descentralización administrativa y fiscal, y la elección popular de alcaldes, que sentaron las bases para la reincorporación a la vida civil de algunas organizaciones guerrilleras como el M-19 y el EPL. Las reformas anteriores tuvieron su punto culminante en la reforma constitucional del año 91. No obstante los avances en la consolidación de la democracia que representaron dichas reformas políticas, al igual que la mayor capacidad de combate del Estado, no ha sido posible derrotar a la insurgencia (Sánchez y Gutiérrez, 2006.). Sin embargo, algunos analistas como Hernando Gómez Buendía, afirman que no existen condiciones para que la insurgencia armada tenga éxito en Colombia (Gómez Buendía y otros, 2003).

En “la década de los noventa se incrementó el número de organizaciones nacionales e internacionales con actividad relacionada con la construcción de paz en el país. Ese incremento se dio, principalmente, en tres momentos: el estallido de la crisis humanitaria en torno al desplazamiento forzado como estrategia de guerra (1985-1995), el escalamiento del conflicto armado y la convocatoria a negociaciones de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y finalmente el desarrollo del andamiaje institucional en torno a la ley de justicia y paz (Ley 975) del 2005 junto con el proceso de desmovilización de los paramilitares

y la iniciación de gestiones tendientes a la visibilización y reparación de las víctimas” (Rettberg, 2012: 25).

Un Proceso de paz actualmente debe permitir y facilitar la desmovilización, el desarme y la reintegración a la vida civil de sus combatientes, considerando como dice Medina (2012) en relación con la actual postura política del más grande grupo guerrillero colombiano: “entre los documentos de las FARC, hace ya tiempo que las exigencias maximalistas han ido dando paso a una plataforma de reformas serias, pero posibles en el marco de una economía de mercado”

Luego, “todo lleva a creer que los cambios en el balance militar que logró la Seguridad Democrática, más una nueva lectura de la situación política e internacional, persuadieron a los mandos guerrilleros de que llegó la hora de la paz” (Gómez, 2013).

Los paramilitares. El paramilitarismo emergió en Colombia en los años ochenta y a diferencia de la insurgencia no empezó como una organización única. En algunas partes del país formaron grupos de menos de 100 personas para evitar los robos, extorsiones y la intimidación de la guerrilla. Algunos fueron promovidos por terratenientes y ganaderos, otros por narcotraficantes. Estos grupos paramilitares posteriormente se confederaron como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que para finales de los años noventa constituyeron un verdadero ejército irregular (Guáqueta & Arias 2011: 473-474). “El término autodefensa hace referencia a la protección espontánea en el contexto de un Estado ausente, mientras el término paramilitar, en el sentido indicado por Kalyvas y Arjona, implica algún vínculo con las autoridades” (Nussio, 2012: 33).

De esta manera, “mientras que algunos sectores han insistido en un fin negociado del conflicto armado, otros prefirieron privatizar y descentralizar la lucha contrainsurgente creando grupos paramilitares y pasando por encima de las funciones del Estado en el mantenimiento del orden público dentro de las fronteras. Incluso dentro del mismo aparato estatal algunos sectores han insistido en la búsqueda de una salida política del impasse armado, mientras que otros (particularmente las fuerzas

armadas) han ofrecido a estos grupos de justicia privada (paramilitares, grupos de autodefensa, escuadrones de la muerte, etc.) protección legal y el apoyo logístico necesario para desarrollar su estrategia contrainsurgente sin restricciones” (Bejarano & Pizarro, 2010: 389-390).

El surgimiento de las AUC coincide con los diálogos de paz entre el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), período durante el cual tienen mayor crecimiento y se convierten en uno de los “grupos armados no estatal más grandes y mejor provisionados del mundo”. Fueron un grupo particularmente cruel, que utilizó el desplazamiento forzado y las masacres para destruir las redes de apoyo de la guerrilla y para aumentar la lealtad hacia su proyecto (Nussio, 2012: 35-36).

“Con el inicio del gobierno de Álvaro Uribe en el 2002, las desmovilizaciones individuales y colectivas llegaron a un nuevo nivel. Aparte de las desmovilizaciones colectivas de las AUC, entre agosto de 2002 y marzo de 2010, más de 21.000 combatientes se desmovilizaron individualmente. La mayoría habían sido miembros de las FARC y el ELN. Las desmovilizaciones individuales continúan siendo una estrategia importante en la lucha contra la insurgencia y proveen a las fuerzas armadas de información valiosa” (Nussio, 2012: 41).

En febrero de 2007 manifiesta Mancuso desde la cárcel “que para a esa fecha había no menos de cinco mil paramilitares armados que actuaban en varias zonas del país. También dijo que esos grupos operaban bajo las órdenes de jefes desmovilizados de las autodefensas. En esos mismos días uno de sus líderes, alias ‘Ernesto Báez’, declaró que al menos trecientos mandos medios de las autodefensas Unidas de Colombia AUC, estaban fuera de control y habían vuelto a las armas” (Pardo, 2007: 11). En el 2008 catorce comandantes de las AUC fueron extraditados a los EEUU por narcotráfico⁵ (Nussio, 2012: 37)

⁵ En diciembre [de 2006], el Presidente ordenó el envío de 59 ex comandantes 'paras' a la cárcel de Itagüí, en Antioquia, por una supuesta situación de inseguridad. Afirmando que "algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz", el 13 de mayo de 2008 ordenó la extradición a EE. UU. de los 14 líderes principales de las Auc. Con ello, logró que pagaran en ese país por sus delitos de

Entre 2003 y 2006 se desmovilizaron 31.000 efectivos de 37 estructuras que entregaron 17.000 armas (Valencia, 2007:21, Nussio, 2012); y, según el Observatorio de Proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR) de la Universidad Nacional, entre el 2003 y enero de 2010 se habían desmovilizado 52.385 personas «35.353 de las AUC y 17.032 de las guerrillas» (ODDR, 2010: 8). En términos relativos y tomando información de Guáqueta & Arias (2011) el 63% de las personas desmovilizadas lo hicieron de manera colectiva y el 37% de manera individual. De las desmovilizaciones individuales el 24% de las FARC, el 5% ELN, el 7% AUC y el 1% otros.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe se crea el Programa de Reincorporación a la vida civil; que, como un programa de reinserción de corto plazo, funcionó entre el 2003 y el 2006; para que posteriormente, con el fin de atender la reinserción en el largo plazo y de manera sostenible, se convirtiera, a partir del 2006, en la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración; y que, con el aumento de la tasa de desmovilizaciones y la necesidad de fortalecer conceptual, operativa y administrativamente el programa, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, pasara a ser la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), garantizando, así, la continuidad y el fortalecimiento de la política de Reintegración; pues la nueva entidad cuenta con mayor autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y, con una estructura organizacional sólida. En siete años de trabajo continuo en el tema 812 personas han alcanzado exitosamente su reintegración (ACR, 2013)⁶.

Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR)

La iniciativa de Estocolmo sobre DDR (conocida por su sigla en inglés, SIDDR) denominó en su momento el proceso DDR como *holding patterns*, referida como una fase en la que aún los grupos

narcotráfico, pero -a juicio de la oposición- impidió que los jefes revelaran verdades inconvenientes para el mandatario y su círculo cercano (Tomado de El Tiempo en internet: http://www.eltiempo.com/100/dk100/cronologia_centenario/ARTICULO-WEB-PLANT_NOTA_INTERIOR_100-8601880.html)

⁶ Tomada de la página de ACR: <http://www.reintegracion.gov.co/Lists/Contenido/DispForm1.aspx?ID=567>

armados ilegales no han hecho un cambio total a la vida legal y mantienen algunas de sus funciones e identidad como combatientes. El SIDDR plantea que para mantener la confianza entre las partes beligerantes, que los combatientes se hagan a la idea que se producirán cambios sustanciales y un arreglo de paz duradero es necesaria una etapa de transición en la reintegración de excombatientes en la que se permita a los miembros de los grupos armados ilegales mantener sus estructura de comando y sus funciones de seguridad durante las conversaciones de paz o inmediatamente después de que se llegue a un acuerdo (Guáqueta & Arias, 2011: 465).

En términos generales se define DDR “como un proceso multifocal y multidisciplinario mediante el cual se desactiva el pie de fuerza y se neutraliza la capacidad bélica (defensiva y ofensiva), el aparato financiero y las redes de tráfico y apoyo, y la estructura general de operaciones de uno o más grupos armados dentro de un conflicto armado. Dado que es un vector de política de paz y el producto directo de una coyuntura de transición, el proceso se encuentra limitado por las condiciones políticas bajo las que tiene lugar y las restricciones que imponen las obligaciones del Derecho Internacional” (Springer, 2005: 61).

Un desarrollo continuo del DDR, incluye una concepción tradicional de su intención de recuperar el control legítimo del Estado (en cuanto al monopolio de la fuerza y el uso legítimo de las armas), como logro eficiente de la transición de la guerra a la paz, que genere un entorno seguro para avanzar hacia el desarrollo sostenible. El logro de ésta transición sería la resultante de un proceso en el que, inicialmente, se establecen objetivos y acuerdos generales a partir de los cuales se alcanzan las metas especializadas de Desmovilización, Desarme y Reintegración; para finalizar, con la puesta en funcionamiento de los acuerdos en un comienzo determinados, previos al proceso de DDR, que permitan retomar los objetivos generales de construcción de paz (Palou & Méndez 2012: 353).

En cuanto a la experiencia acumulada en relación con los procesos de reintegración en el mundo es importante tener en cuenta que “el primer programa de DDR con asistencia internacional se llevó a cabo en Namibia en 1989” (Nussio, 2012). En consecuencia “tanto la teoría como la práctica de DDR

encuentran en los organismos internacionales una fuente importante de conocimiento sistematizado y de instrumentos de acción validados por la experiencia” (Palou & Mendez 2012: 349).

Para el caso de los procesos de DDR en el país, puede aplicar la afirmación que en relación con el mundo de construcción de paz en Colombia sucede, y es que “sigue siendo endogámico con una reducida capacidad de irradiar el debate hacia la sociedad colombiana, en general, y hacia sectores específicos, en particular. Esto resulta inadecuado desde el punto de vista pedagógico y práctico, pues quien no conoce ni entiende los retos de la construcción de paz difícilmente entenderá los temas en que consiste, los costos que implica, el tiempo que toma y los riesgos que corre” (Rettberg 2012: 39).

Los programas de DDR han evolucionado en Colombia desde 2003, cuando se produjo la primera reforma a la oferta estatal de DDR de los años noventa, esto es, una reestructuración para responder a la desmovilización que inició en 2002 con desertores de las FARC y el ELN. Hoy existe una política sofisticada de reintegración tanto para población desmovilizada individual y como colectivamente. Dicha política opera con alrededor de 500 personas de la ACR, muchos financiados con el apoyo de la OIM, en su mayoría psicólogos y trabajadores sociales que asisten a los excombatientes, sus familias y a las comunidades receptoras. Es considerado como el programa de reintegración más desarrollado y mejor financiado que haya habido hasta ahora en el mundo, aunque hasta ahora este diseñado para excombatientes rasos de guerrilla o paramilitares (Guáqueta & Arias, 2011: 506-507).

La desmovilización en Colombia durante los últimos 10 años, tanto de guerrilla como de paramilitares, se ha realizado de manera individual y colectiva. De manera individual desde el 2002 hasta la fecha principalmente miembros de las FARC y del ELN y algunos de las AUC; y de manera colectiva entre 2003 y 2007 por las autodefensas durante el gobierno de Uribe.

En el 2002 y 2003 las deserciones de las FARC y el ELN se elevaron como nunca antes en Colombia, como resultado de varios factores: los efectos de la seguridad democrática; y la fatiga de los combatientes por la presión militar intensificada por el gobierno desde 1997, y su intensa propaganda de disuasión, como los más importantes (Guáqueta & Arias, 2011: 500).

Reintegración

Lograr sustituir los beneficios económicos de la guerra en contextos económicos deprimidos o donde las actividades productivas, de transformación y comercialización han sido copados y ello se manifiesta con porcentajes importantes de desempleo o desocupación, es una tarea que requiere múltiples esfuerzos y la reorientación de una economía doméstica que amplíe, no solo las oportunidades y la autosuficiencia, sino las capacidades de los desempleados y los nuevos incorporados a la vida civil en un ambiente de confianza y de ayuda mutua con el apoyo de la cooperación internacional y el debido cuidado de no generar expectativas, tanto por los gobiernos locales como por la cooperación internacional, que disten del verdadero cumplimiento de las mismas. Es importante partir del hecho de que “mientras el desarme y la desmovilización son fases relativamente rápidas, verificables y que toman provecho del entusiasmo inicial causado por el descenso de la violencia y la visibilidad internacional alcanzada por el proceso durante las primeras etapas, la reinserción, en cambio, exige un compromiso financiero muy alto, sus resultados son valorables tan solo en el largo plazo, buena parte del optimismo inicial ya se ha esfumado y los golpes de realidad terminan por reducir la expectativa inicial de éxito” (Springer, 2005: 62).

En buena medida un empleo permanente y adecuadamente remunerado para cubrir por lo menos las necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación y recreación o a través de una actividad económica que permita generar estos ingresos mínimos, es una causal importante en la no reincidencia a la ilegalidad. Por lo tanto “la falta de oportunidades económicas es considerada una de los principales determinantes de la participación en grupos armados ilegales, o para reincidir en actividades ilegales tras la desmovilización” (Nussio 2012: 150). En consecuencia la reintegración se convierte en un aspecto importante dentro del proceso de reinserción.

La reintegración económica dentro de los procesos de DDR no necesariamente está articulada a combatir las causas que dieron origen al conflicto armado (Springer 2005: 63). Es frecuente que ella se oriente a solucionar paliativamente algunas necesidades básicas y de corto plazo sin que ello obedezca

a cambios estructurales que debilite las razones objetivas o subjetivas, de desequilibrios regionales, de relaciones centro periferia fuertemente dependientes o de desigualdades socioeconómicas profundas, entre otras, que llevaron a optar por la lucha armada.

Ir más allá significa concebir la reintegración como “un proceso de largo plazo cuyo objetivo es convertir a las personas desmovilizadas en miembros económicamente independientes y socialmente aceptados por sus comunidades” (Nussio, 2012). Es decir la “reintegración, comprende desde la desarticulación del grupo armado hasta que los combatientes recobran el carácter civil y por lo tanto empiezan a derivar su sustento de actividades lícitas y libres de violencia (Palou & Méndez 2012: 352).

En síntesis es importante diferenciar los alcances tanto de la reinserción como de la reintegración con el fin de avanzar de manera paulatina y firme hacia la incorporación a la vida civil de los excombatientes con posibilidades de rehacer autónomamente sus vidas sin el riesgo de que reincidan en actividades ilegales. Siendo así,

“la reinserción, constituida por las medidas de corto plazo que ayudan al desmovilizado a trasladarse a su lugar de residencia desde los lugares de concentración inicial y a sobrellevar los primeros meses de la vida civil; se trata de un paquete de asistencia básica, como por ejemplo estipendios mensuales, paquetes de herramientas, ropa u otras cosas de uso inmediato. La reintegración propiamente dicha es un proceso de mediano y largo plazo, que requiere el diseño y aplicación de otro tipo de medidas. El objetivo de ésta última etapa tiene que ver con la inserción social, civil y económica, que solo se puede lograr mediante largos procesos de educación, capacitación, apoyo sicosocial y transformación de las dinámicas de socialización de los excombatientes” (Palou & Méndez 2012: 352).

Por su parte esta diferenciación también la realizan, de manera similar, otros autores, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, quienes, además, simultáneamente relacionan cada etapa con una o varias experiencias en el Mundo. En términos generales manifiestan que durante la reinserción se proporcionan las necesidades básicas y se garantiza el retorno a sus comunidades en los primeros meses. Y, durante la reintegración se proporcionan los medios de vida sostenibles (Carames, Fisas, Luz 2006: 23).

La ruta de integración de los combatientes individualmente desmovilizados en Colombia desde el 2002 constaba de los siguientes pasos: El desertor pasaba hasta tres días detenido, sometido a interrogatorio militar, como primer filtro para establecer su identidad; después del cual entraba al programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado (PAHD), dirigido por el Ministerio de Defensa, quien lo ubicaba en un hogar temporal y le proveía asistencia básica (ropa, elementos de aseo personal, atención médica y una pequeña mesada para su subsistencia) hasta que hubiere pasado el segundo filtro, esto es, verificación de antecedentes por la fiscalía; si el desmovilizado no ha cometido crímenes de guerra pasaba al Programa de Reinserción a la Vida Civil (PRVC), a cargo del Ministerio del Interior, y empezaba un programa de reinserción que duraba dos años, durante los cuales se le daba vivienda, una mesada mensual, entrenamiento vocacional y asistencia psicológica; además se incluían en el sistema nacional de salud y pensión; su familia (esposa e hijos) en casos especiales recibían apoyo adicional y los excombatientes en riesgo recibían protección; al final de la etapa los funcionarios del Ministerio del Interior empezaban a formular un plan empresarial para una microempresa con un apoyo final de US\$4.000 con lo cual finalizaba el ciclo (Guáqueta & Arias, 2011: 500-501).

Entre 2003 y 2007 se le hicieron varios ajustes a esta ruta: se fortaleció la asistencia psicológica, se promovió la reconciliación, se descartaron los albergues colectivos a casas individuales, se amplió la reintegración económica debido al fracaso de las microempresas; se fortalecieron las capacidades laborales e incrementó el apoyo del sector privado y se condicionó la mesada económica a la asistencia a actividades de capacitación y de apoyo (Guáqueta & Arias, 2011: 501). Todo lo anterior bajo la coordinación de la ACR creada en septiembre de 2006 como una consejería del gobierno nacional y que en 2010 constituida como Agencia de la presidencia de la República. En entrevista en febrero 18 de 2013 dice el Director de ACR: “Tras seis años de la creación de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) -donde están vinculados 33.000 de los 55.000 desmovilizados del país-, la falta de empleo y el rechazo de la sociedad siguen siendo la piedra en el zapato para el proceso de reinserción de esa población” (El Tiempo, 2013).

En la misma entrevista dice el Director de ACR, Alejandro Eder en relación con las dificultades presentadas:

“La estigmatización que sufren los desmovilizados es la principal (...) Cuando las personas se enteran de que el vecino, o el señor de la tienda, pertenecieron a un grupo armado automáticamente se asustan y terminan cerrándole las puertas. Vale aclarar que la reintegración no la hace la Agencia: los preparamos, pero es la sociedad la que dará las oportunidades. Para superar ese miedo, se debe entender que el desmovilizado no sale del monte a la empresa o a la sociedad. Por ejemplo, más de 13.000 que ya pasaron su bachillerato y 600 están la universidad. También hay rechazo de parte de las empresas. Hay alrededor de 33.000 desmovilizados en el proceso y 11.000 por fuera que están en la legalidad. Hay 700 empresas y fundaciones que nos apoyan. Pero si uno mira la población desmovilizada, la tasa de desempleo es del 21 por ciento, el 79 por ciento labora: 8.000 en el sector formal y 17.000 en el informal. Pero lo cierto es que el 90 por ciento están trabajando sin que sus jefes sepan que son desmovilizados (...) Ha sido muy difícil en estos 10 años lograr que los empresarios les abran las puertas” (El Tiempo, 2013).

La Alta Consejería para la Reintegración (ACR) fue creada en el 2006 para sortear la crisis en la que se encontraba el proceso de reinserción a nivel nacional excepto en Medellín, para ello se adoptó la experiencia exitosa lograda por el Programa de Paz y Reconciliación (PPR) de éste municipio (Llorente & Palou, 2011: 424).

El éxito del PPR llevado a cabo durante la administración del Alcalde Sergio Fajardo (2004-2007) fue evaluado por Llorente & Palou a partir de preguntarse ¿Cuál ha sido la efectividad del PPR en la reintegración de la población paramilitar desmovilizada? que respondieron a la luz de tres criterios internacionales que la literatura señala como claves para determinar el éxito del proceso que garantice la estabilidad del postconflicto: “a) la ruptura del comando y control y de la capacidad militar de las facciones en guerra; b) aceptación por parte de los desmovilizados del sistema y de las reglas del juego político, y c) la reintegración de los desmovilizados a la economía, a la familia y a la vida comunitaria” (Llorente & Palou, 2011: 438).

“El PPR presentó un cambio sustancial con respecto al enfoque que tradicionalmente se venía aplicando en Colombia e internacionalmente para la reincorporación a la vida civil de excombatientes. Por lo general, las intervenciones de éste tipo han enfatizado la reinserción política y económica de estos individuos. En este caso el PPR priorizó la transformación de los individuos sobre la consecución de empleos o de proyectos productivos para los desmovilizados. La vinculación inicial de desmovilizados a empleos municipales le daría la razón a la administración Fajardo, pues demostró que en efecto estos estaban muy poco preparados para afrontar una vida laboral satisfactoriamente. Además, indicó la necesidad de ampliar de manera

indefinida el período de atención que según lo acordado en la Ceja sería de doce a máximo dieciocho meses. Desde este enfoque se desprende un modelo de intervención integral denominado ‘regreso a la legalidad’ que busca transformar a los excombatientes mediante acciones de acompañamiento psicosocial individual, educación y capacitación con una propuesta acorde con las necesidades específicas de la población desmovilizada, de generación de ingresos y de acompañamiento jurídico” (Llorente & Palou, 2011: 444-445).

“Para responder a este reto el Gobierno nacional viene estructurando desde el año 2002 un esquema de reinserción y reintegración a la vida civil que, luego de 6 años de aprendizajes cuenta hoy en día con los siguientes componentes: 1) ayuda humanitaria; 2) afiliación al régimen subsidiado de salud; 3) posibilidad de formación académica y ocupacional; 4) atención psicosocial a través de terapia individual, talleres colectivos y diferenciados según el tipo de población y las características de las personas; y 5) alternativas para generación de ingresos que contemplan el trabajo formal, informal y los proyectos productivos, actualmente denominados planes de negocio” (Mendez & Rivas, 2008: 10).

En relación con los planes de negocio o proyectos productivos instalados por los desmovilizados plantean éstos dos autores:

“El porcentaje de proyectos que fracasaron supera el 80% y los restantes sobrevivieron con dificultad. Varios factores afectaron el buen desarrollo de estos proyectos: (1) el capital semilla se entregó sin un verdadero estudio de viabilidad técnica y financiera; (2) los recursos otorgados por el Gobierno se dieron bajo el entendido de que a través del sistema financiero se lograría doblar la inversión pública para iniciar la actividad productiva, lo cual no fue posible dado que la mayoría de los desmovilizados no podían ser sujeto de crédito por carecer de garantías suficientes; (3) no se logró una adecuada articulación entre el diseño y desarrollo de los proyectos productivos y un esquema de capacitación que sustentara dicho proceso; (4) no fue posible incluir al sector privado en este proceso; y (5) muchos de los desmovilizados no tenían el perfil de empresarios que exigía el montaje y ejecución de un proyecto de esta naturaleza” (Méndez & Rivas, 2008: 11).

Según Econometría (2010) el componente de generación de ingresos es el que menor dinamismo ha presentado comparado con el psicosocial, de educación formal y capacitación para el trabajo y de salud. En cuanto a la situación laboral de los participantes el 73% se encuentra trabajando, un 12% está desempleado y 15% no participa de la oferta laboral.

3. PRESENTACIÓN DE DATOS

Esta investigación intentó registrar las percepciones y emociones de los participantes⁷, en proceso de reintegración económica para lo cual tienen un negocio en funcionamiento o próximo a instalar o se encuentran vinculados laboralmente o en busca de trabajo, en el marco del proceso DDR y que actualmente viven en Ciudad Bolívar, Bogotá.

El objeto de la investigación no es evaluar la política pública ni a las entidades responsables o de apoyo que han intervenido en el proceso DDR, sino realizar un acercamiento a los participantes con el fin de conocer la experiencia desarrollada por ellos en torno a su restablecimiento económico, cómo la perciben y valoración y cuáles son sus inquietudes o sugerencias.

Por lo tanto la realidad que se considerará será la percibida por los participantes a partir de las percepciones objetivas o subjetivas de cada uno de ellos en torno a su experiencia particular de restablecimiento económico en su condición de desmovilizado, por una parte; y, por otra, la valoración que ellos, consciente o inconscientemente, le dan a un evento determinado, a partir de sus propias emociones.

Las entrevistas no tendrán como objetivo registrar o generar consensos, sino generar un conocimiento amplio, y lo más completo posible en torno a la diversidad de experiencias que las personas desmovilizadas puedan tener a partir de la muestra de la cual se pretende inferir de manera preliminar.

La metodología utilizada se basó en la desarrollada por Nussio (2012) como referente, pues no se aplicó de la manera precisa y exhaustiva como éste académico lo hizo para su de Tesis doctoral. Tan solo se toma como referente y recogen algunos elementos generales de la metodología (grande theory o “teoría fundamentada”) que guiaron algunas preguntas y cómo las mismas se van configurando y recreando a medida que se avanza; también guió la manera de acercarse a los entrevistados. Igualmente, tampoco se elabora un marco teórico basado en los temas centrales, categorías y subcategorías que se

⁷ La ACR denomina participante al combatiente (de las AUC o de la guerrilla) que se desmovilizó individual o colectivamente entre 2002 a la fecha y que se encuentra en proceso de reintegración con la Agencia.

desprenden del discurso de los entrevistados, ni se establecen las estrategias desarrolladas por los mismos a partir de su experiencia de vida. Aquí lo fundamental es el registro de las percepciones y emociones como punto de partida para el desarrollo de lo pendiente que se acaba de señalar. Esto por la limitante temporal que en el marco de la materia de la Maestría se tiene ante el cumplimiento de aspectos formales propios del proceso de formación a la fecha del autor de éste documento.

Se realizaron en total 17 entrevistas semiestructuradas a igual número de personas. Se entrevistaron 11 desmovilizados y 6 funcionarios de ACR y OIM. Las entrevistas de los participantes corresponden a cuatro ex integrantes de las FARC y siete de las AUC. Se entrevistaron tres personas de la ACR y tres de la OIM.

Aunque inicialmente la intención era entrevistar únicamente participantes, finalmente se tomó la decisión de entrevistar funcionarios de ACR y OIM con el fin de dar contexto al proceso llevado a cabo y despejar inquietudes o aclarar afirmaciones realizadas por los participantes en relación, principalmente con el proceso que han llevado a cabo referido a expectativas en torno a sus proyectos productivos o sus procesos jurídicos y de acompañamiento.

Las entrevistas con los participantes fueron apoyadas por la ACR quien convocó a los participantes considerando dos aspectos principales que hubiesen terminado el proceso de capacitación y que tuvieran un proyecto productivo (instalado o próximo a instalar), esto llevó a que el entrevistado que menor tiempo llevaba en el proceso fuera mayor a cuatro años.

Además se solicitó considerar que los participantes tuvieran negocios diversos en cuanto el tipo de producto o servicio a vender, el tamaño o dimensión del negocio, que se ubicaran en un amplio espacio geográfico (es decir pertenecieran a diferentes barrios de ciudad Bolívar), que la proporción hombres/mujeres fuera la más cercano a uno, y de diferentes edades. Estos requerimientos finalmente fueron casi totalmente desconocidos debido a inconvenientes de disponibilidad de la mayoría los participantes, bien por sus compromisos personales y laborales, y por lo difícil que es localizarlos, ya que muchos de ellos cambian con frecuencia sus números celulares por seguridad.

Una vez aceptaban dar la entrevista, en tanto que la misma era absolutamente voluntaria, algunos se excusaban por no poder asistir o simplemente no llegaban (entre los once entrevistados solo hubo una mujer). Solo uno de los entrevistados se realizó con el apoyo de OIM a quien se le realizó la entrevista en una cafetería cercana a la Universidad de los Andes. Las 10 entrevistas restantes se realizaron en las instalaciones del Centro de Servicios de Ciudad Bolívar (CSCB), en una oficina asignada para el efecto en condiciones de privacidad que ofreció un ambiente de confianza y bastante tranquilidad.

Las entrevistas a los profesionales de la ACR, se realizaron en las instalaciones de CSCB. Los entrevistados correspondían a la directora del CSCB, el Coordinador de los reintegradores⁸ y un reintegrador. Los funcionarios entrevistados de la OIM igualmente se escogieron de tal manera que correspondiera a diferentes niveles de responsabilidad: directivo, técnico y operativo.

Cada entrevista tuvo una duración promedio de 50 minutos y las preguntas fueron evolucionando en la medida en que se completaba la claridad de un tema o se generaban nuevas preguntas para desarrollar aquellos que en un momento dado quedaban planteados.

Las entrevistas se realizaron entre mediados del mes de marzo y principios del mes de mayo, se transcribieron y formarán parte anexa del trabajo de investigación.

4. DISCUSIÓN DE DATOS

Se analizarán y se resaltarán aquellos aspectos que puedan dar cuenta de un universo lo más completo posible en torno a las percepciones y emociones, tanto de cada uno de los entrevistados, como del conjunto de la muestra; procurando, finalmente, elaborar un mapa de la realidad subjetiva en torno al sentimiento de satisfacción o insatisfacción del proceso de reintegración económica, así como de las críticas y sugerencias o propuestas de mejoramiento o reorientación de procesos y de resultados.

⁸ Los reintegradores (anteriores tutores) son profesionales que acompaña alrededor de 70 a 80 participantes cada uno. Los participantes son apoyados según demandas que los mismos demanden, además de recibir el aval para el beneficio económico.

La realidad percibida a través de las entrevistas se confrontará con el modelo enmarcado a través de la teoría, y la política pública de la ACR, en el marco del restablecimiento económico, con el fin de establecer la distancia entre el modelo y realidad subjetiva; y, finalmente, analizar las causas de alejamiento o acercamientos existente, y los posibles ajustes teóricos o prácticos que acerquen realidad subjetiva y modelos.

A partir de las entrevistas se logra percibir que la mayoría de los participantes entrevistados manifiestan un gran interés por tener una vivienda propia donde establecerse con su familia que además de asegurar donde resguardarla, facilite las condiciones para cubrir otras necesidades básicas (alimentación, vestido y educación principalmente). Algunos de ellos incluso venden sus negocios para invertirlos en la compra de vivienda.

La venta de los negocios se hace, además de facilitar la compra de vivienda, porque no son sostenibles o lo suficientemente rentables como para generar excedentes suficientes para cubrir necesidades básicas.

Durante el proceso de capacitación muchos participantes optan por diversas capacitaciones no necesariamente para fortalecer sus habilidades empresariales o laborales sino por el exclusivo hecho de soportar una capacitación que le permita recibir el apoyo económico respectivo entregado por ACR. De esta manera algunos de ellos reciben inicialmente capacitación en mecánica automotriz, luego en sistemas, luego panadería en este u otro orden, sin desarrollar habilidades suficientes en ninguno de ellos para acceder a un empleo o sacar a adelante un plan de negocios específico de estas especialidades o de otras que se hayan ofrecido. Este aspecto recientemente ha sido reorientado por la ACR con el fin de hacer más efectivo este proceso de formación y con ello las habilidades para incorporarse al entorno laboral o productivo. Como lo expresa uno de los funcionarios de la OIM, como una política que se ha construido sobre la marcha de prueba y error, de aprendizaje y de formación continua que ha generado unas condiciones técnicas más sólidas desde el punto de vista técnico y jurídico tanto para el gobierno como para la cooperación internacional en Colombia.

En términos generales los participantes manifiestan satisfacción en relación con el trato que reciben, por un lado, de los funcionarios de ACR, y por otro, de los tutores que se dedicaban de manera especial a cada uno de los componentes de atención: salud, educación, psicosocial o de generación de ingresos como por quienes hoy asumen todos estos componentes como reintegradores.

En cuanto a las motivaciones por las cuales una persona decide ingresar a un grupo armado ilegal son venganza, económicos, coacción, reclutamiento forzado y algunos porque les gusta la guerra. Y se mantienen en el proceso de reinserción motivados por el acercamiento a la familia, cansancio de la guerra y la tranquilidad de alejarse del asedio de la muerte que genera la guerra. Entre los más importantes. Ninguno de los entrevistados manifestó permanecer en la legalidad o en el programa de reintegración por razones económicas.

5. CONCLUSIONES

La experiencia de DDR en Colombia, y en particular el componente de reintegración, es una de los más exitosos en el mundo y con mayor apoyo presupuestal. Es, también, un caso excepcional en cuanto al porcentaje de financiación por el gobierno, ya que la mayoría de los procesos en el mundo tienen un aporte financiero importante de la cooperación internacional.

La financiación del proceso de reintegración de la población desmovilizada en Colombia ha sido financiado en un 90% con presupuesto gubernamental y un 10% por la cooperación internacional. Esta cooperación proviene de Estados Unidos, Suecia, Holanda, la Unión Europea y Alemania principalmente.

Del total de la población desmovilizada el 60% está en proceso de reintegración. El 40% no hace parte del proceso porque las personas se encuentran privados de la libertad, han fallecido, han reincidido o se han marginalizado voluntariamente.

Actualmente el 45% de los mandos de las Bacrim o grupos emergentes ilegales provienen de la población desmovilizada; considerados, por tal razón, reincidentes.

La experiencia desarrollada por las alcaldías de Medellín y Bogotá, el apoyo financiero de la USAID y el apoyo técnico de la OIM han sido fundamentales en el proceso de fortalecimiento de la política pública en torno al restablecimiento de población desmovilizada.

A partir de una autoevaluación puntual por parte del Gobierno Colombiano para identificar los logros, las debilidades, las lecciones aprendidas y las mejores prácticas de lo hasta ahora desarrollado en torno al proceso de reintegración debe realizarse próximamente considerando aspectos diferenciales (rural y urbano, género, edad, nivel educativo, tiempo de militancia en el grupo armado), entre otros aspectos, que fortalezcan la posibilidad de éxito con el fin de prepararse ante una eventual desmovilización que se genere a partir de los actuales diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc.

Se debe continuar fortaleciendo el compromiso del sector empresarial con el restablecimiento de los desmovilizados y promover en la sociedad en general mayor tolerancia y compromiso con la población desmovilizada.

El proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), está constituido por dos componentes (DD) que en el fragor de los acuerdos iniciales, en el marco de procesos de construcción de paz, son los que tienden a desarrollarse y concretarse primero, y en tiempos relativamente cortos; mientras el tercero, el de Reintegración (R), que es una etapa posterior, sin la emotividad de entrada y con menos difusión y presión de los medios de comunicación tiende a debilitarse con el paso del tiempo.

Las experiencias de DDR en el mundo, hasta ahora referenciadas, tienen alrededor de dos décadas, y ellas se han caracterizado por diversos resultados, en relación con los procesos de paz, en zonas que fueron, o que aún son, afectadas por conflictos armados. Y, específicamente, con el proceso de reintegración, los resultados también son disímiles, especialmente en el componente de generación de

ingresos, que es el que mayores complicaciones presenta; en buena parte, debido al entorno de las economías donde él se desarrolla; en tanto que dicho entorno ha sido afectado notoriamente por el conflicto; o porque es el contexto, precisamente, que dio lugar al enfrentamiento armado.

En Colombia, el proceso de reintegración se ha fortalecido, en buena medida, debido al creciente número de desmovilizados (55.000 personas, según referenció el Director de ACR recientemente en entrevista con un diario de circulación nacional) que hay que atender, a través de prácticas sostenibles, que eviten que ellos reincidan en la ilegalidad, en un contexto en el que la falta de empleo y el rechazo de la sociedad son los mayores inconvenientes para la reintegración de los desmovilizados.

Actualmente, la política de reintegración en el país se convierte en punto de referencia como experiencia a ser considerada en países donde se quiere iniciar el proceso; pero de igual manera la experiencia colombiana se ha nutrido, en los últimos años, de la experiencia internacional para su fortalecimiento.

BIBLIOGRAFIA

- Arnson, Cynthia (2005). "The Political Economy of War: Situating the Debate", en Cynthia Arnson and William Zartman (eds.), *Rethinking the Economics of War: The Intersection of Need, Creed and Greed*, Hopkins University Press, Washington D.C., 1-22.
- Bejarano, Ana María y Pizarro, Eduardo (2010). "Colombia: El Colapso Parcial del Estado y la Emergencia de los 'Protoestados'", en Orjuela, Luis Javier (Compilador): *El Estado en Colombia*, pp. 103-217. Bogotá: Ediciones Uniandes.
- Berdal, Mats y Keen, David (1997). "Violence and Economic Agendas in Civil Wars: Some Policy Implications". *Journal of International Studies* 26(3), 795-818.
- Carames, Albert & Fisas, Vicenc & Daniel, Luz (2006). *Análisis de los Programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) existentes en el mundo durante 2005*. Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona: AECL.

- Camacho, Guisado Alvaro (2002). “Credo, necesidad y codicia”, en Análisis Político No. 46, mayo-agosto 137-150.
- Collier, Paul (2000). “Economic Causes of Civil Conflict and Their Implications for Policy”, Development Research Group, Banco Mundial.
<http://econ.worldbank.org/programs/conflict/topic/13188/library/doc?id=13198>
ó <http://www.globalpolicy.org/security/issues/diamond/wb.htm> [14.12.2000]
- Collier, Paul y Hoeffler, Anke (2001). Greed and Grievance in Civil War.
<http://www.worldbank.org/research/conflict/papers/greedandgrievance.htm>[05.11.2001] ó
<http://oep.oxfordjournals.org/content/56/4/563>
- Econometría (2010). Evaluación de resultados de la política de reintegración social y económica para personas y grupos armados al margen de la ley en Colombia. Bogotá: DNP
- Guáqueta, Alexandra y Arias Gerson (2011). “Impacto de los programas de desmovilización y reinserción sobre la sostenibilidad de paz: el Caso de Colombia”. En la desmovilización de los paramilitares en Colombia. Entre el escepticismo y la esperanza. Bogotá: Ediciones Uniandes.
- Gutierrez, Francisco y Barón Mauricio (2008). ÓRDENES SUBSIDIARIOS. Coca, Esmeraldas: La Guerra y la Paz. En Colombia Internacional No. 67, Junio 102-129
- Gómez Buendía, Hernando (2013). Las FARC a veces tienes la Razón, en razonpublica.com.
<http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/3558-las-farc-a-veces-tienen-la-razon.html>
- Gómez Buendía, Hernando y otros (2003). El Conflicto: Callejón con Salida. Cap. 1, pp. 16-45, Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia, PNUD.
- Humphreys, Macartan (2005). “Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution: Uncovering the Mechanisms”, en Journal of Conflict Resolution, Vol. 49, No. 4, 508-537.
- Keen, David (2008). Complex Emergencies, Polity Press: Oxford (extractos). -Wennmann, Achim (2007). What is the Political Economy of Conflict? Delimiting a Debate on Contemporary Armed Conflict. Prepared for the International Studies Association (ISA) Conference, Chicago
http://www.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/1/7/8/9/4/pages178943/p178943-1.php
- Le Billon, Philippe (2009). “Tipos de recursos naturales e iniciativas para la finalización de conflictos”, en Colombia Internacional, No 70, julio – diciembre, 9 - 34.
- Llorente, María Victoria y Palou, Juan Carlos (2011). “La reintegración de excombatientes en Medellín: ¿de dónde venimos y a dónde vamos? En la desmovilización de los paramilitares en Colombia. Entre el escepticismo y la esperanza. Bogotá: Ediciones Uniandes.

- Medófilo Medina (2012). Camino de Oslo y de La Habana en [razónpublica.com](http://www.razonpublica.com), septiembre de <http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/3239-icamino-de-oslo-y-de-la-habana.html>
- Nussio, Enzo (2012). LA VIDA DESPUÉS DE LA DESMOVILIZACIÓN: Percepciones, emociones y estrategias de exparamilitares en Colombia. Bogotá: Ediciones Uniandes.
- Méndez, M. Lucía & Rivas, Ángela (2008). Alternativas de generación de ingresos para desmovilizados: El programa de reinserción a la vida civil y la Alta Consejería para la Reintegración. Series de informes No. 5. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.
- Palou, J. Carlos & Méndez, M. Lucía (2012). “Balance de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR) en Colombia: 1990-2011”, en Construcción de paz en Colombia. Bogotá: Ediciones Uniandes.
- Pardo, Rafael (2007). Fin del paramilitarismo: ¿Es posible su desmonte? Bogotá: Ediciones B
- Rettberg, Angelika (2012). “Construcción de paz en Colombia: contexto y Balance”, en Construcción de paz en Colombia. Bogotá: Ediciones Uniandes.
- Ross, M. L. (2004). “What Do We Know about Natural Resources and Civil War?”, En Journal of Peace Research, May 1, 2004; 41(3): 337 – 356.
- Sánchez, Gonzalo (2009). Guerras, Memoria e Historia. Primera edición 2006. Medellín: Impresos Multicolor.
- Sánchez, Gonzalo y Gutiérrez, Francisco (2006). Prólogo: Nuestra Guerra Sin Nombre. Transformaciones del Conflicto en Colombia, pp. 11-34, Norma,
- Springer, Natalia (2005). DESACTIVAR LA GUERRA: Alternativas audaces para consolidar la paz. Bogotá: Aguilar.
- Valencia, Leon (2007). “Los caminos de la alianza entre los paramilitares y los políticos”, en PARAPOLÍTICA: La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos. Bogotá: Intermedio.